**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**

**

**JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

**SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020)

**Expediente: 11001 3334 003 2020-000-68-00**

**Accionante: WILLIAM ADENIS LANCHEROS CASAS**

**Accionados: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**.

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

**ACCIÓN DE TUTELA**

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela presentada por el señor William Adenis Lancheros Casas en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

**1. ANTECEDENTES**

El accionante sustentó su solicitud en los siguientes:

**1.1. Hechos**

Aduce el accionante que el 10 de julio de 2018, instauró queja ante el Ministerio de Defensa Nacional, por el delito de falsedad en documento público respecto de las actas 009 del 4 de julio de 2017, 0010 del 14 de agosto de 2017 y 001 del 9 de febrero de 2018, emanadas de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, sin embargo, la referida queja fue remitida por competencia a la Policía Nacional.

Indica que, al consultar el expediente, encontró que no aparecían algunos de los documentos que aportó con la queja, por lo que procedió a reconstruir el expediente y mediante petición del 14 de febrero de 2019, solicitó la investigación respectiva.

Señala que a la petición realizada el 14 de febrero de 2019, se dio respuesta por parte del jefe Grupo de Procesos Disciplinarios Primera Instancia, sin que se haya tomado medidas de fondo por parte del Inspector General de la Policía Nacional.

Manifiesta que el Mayor Fabio William Acevedo Flórez se desempeña como jefe del Grupo de Ascensos y Retiro de la Policía Nacional desde el 2009, frente a lo que considera el accionante, se puede llegar a presentar direccionamiento contrario a derecho.

Expone que, en octubre de 2018, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por el retiro irregular causado durante los actos preparatorios del llamado al curso de teniente coronel del cual conoce el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá; también demando por la misma causa el señor Élber Julián Garzón Rodríguez y su proceso cursa en el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá.

Advierte que el 6 de noviembre de 2019, dentro del proceso 11001333502420180048100 se citó a audiencia de pruebas, en la que el señor Wilmer Alfonso Vegas Carvajal, civil adscrito a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, reconoció que “*él fue quien realizó algunos cambios de una de las actas que fueron alteradas*”, por lo que el accionante, solicitó copias de esa actuación, con destinó a la Fiscalía General de la Nación a la Justicia Penal Militar y a la Inspección General de la Policía Nacional quien adelanta la investigación disciplinaria por la queja interpuesta por el tutelante en contra de los uniformados que lideran el grupo de ascensos.

Mediante petición del 28 de enero de 2020 y de conformidad con lo entregado por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, solicitó la ruptura de la unidad procesal de la investigación INSGE-2019-2, por cuanto el competente para adelantar la investigación del funcionario de ascensos, es la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Defensa y no la Inspección General de la Policía Nacional.

Señala que el 12 de febrero de 2020, mediante comunicación S-2020-003032/INSEG-PRODI-29.27 el señor Mayor Carlos Eduardo Latorre Duque le da respuesta y no el Inspector General, desconociendo si lo enteró de las irregularidades que el accionante informó. Frente a las pruebas se le indicó que se incorporarían al expediente y en cuanto a la ruptura de la unidad proceso se le manifestó que la misma se evaluaría.

Advierte que, por encontrarse en desacuerdo con la referida respuesta, el 18 de febrero de 2020, radicó por segunda vez petición con el fin de obtener respuesta de fondo, poniendo de presente al inspector general de la Policía Nacional de las irregularidades, en cuanto considera necesario conocer el trámite dado por esa Inspección para investigar al funcionario respecto del que interpuso la queja el accionante.

El mayor Carlos Eduardo Latorre Duque y no el inspector general de la Policía Nacional le contestó mediante comunicado oficial del 2 de marzo de 2020, en la que se le indica que ya se había dado respuesta a través de comunicación oficial del 12 de febrero de 2020.

Menciona que el 12 de marzo de 2020, instauró acción de tutela, con el fin de que se ampararan los derechos fundamentales. La acción constitucional le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, bajo el radicado 1110013334004 2020 00050-00, quien, mediante fallo del 26 de marzo de 2020, tuteló los derechos de petición y debido proceso, respecto de las peticiones de 28 de enero de 2020 y 18 de febrero de 2020.

Señala que el 3 de febrero de 2020, radicó peticiones dirigidas al director general de la Policía Nacional radicado 008068, al subdirector general de la Policía Nacional radicado 008069 y, al director de Talento Humano de la Policía Nacional radicado 008070, mediante las que solicitó: i) No seleccionar y no recomendar al mayor Fabio William Acevedo Flórez quien se desempeña como jefe del Grupo de Asensos de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, ii) Se le permita realizar inspección al original del acta 009ADHU-GRUAS-2.25 APROP-GRURE 3.22 del 4 de julio de 2017 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, iii) Se ordene la reubicación del mayor Fabio William Acevedo Flórez, iv) Se le informe si el mayor Fabio William Acevedo Flórez en calidad de jefe de Ascensos de la dirección de Talento Humano de la Policía Nacional se ha declarado impedido para realizar el procedimiento de evaluación de la trayectoria profesional, v) Se adelante la investigación disciplinaria en contra de capitán Rubén Darío Murcio Domínguez, quien fungió como jefe de Grupo de Reubicación Laboral, Retiros y Reintegros, asimismo solicitó se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación, vi) Reitera la petición de inspección al original del 009ADHU-GRUAS-2.25 APROP-GRURE 3.22 del 4 de julio de 2017 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, vii) Solicita al director general de la Policía Nacional la intervención inmediata en el proceso P-INSGE-2018-251 adelantado por la Inspección General de la Policía Nacional, viii) Que el director de la Policía Nacional le informe si tenía conocimiento de “estos hechos criminales al interior de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y en el evento que conociera de esas irregularidades, que actuaciones se adelantaron a fin de mitigar las mismas”, ix) En caso de no poder dar respuesta a las peticiones se le explique los argumentos de derecho y el motivo por el cual no es posible dar respuesta, como en el caso de reserva de la información, x) Solicita al director de la Policía Nacional que en el evento en el que se presenten daños a la vida e integridad personal se haga responsable a los referidos funcionarios públicos de esa entidad.

Refiere que el 5 de febrero de 2020, el subdirector general de la Policía Nacional le dio respuesta parcial y señala que se dio trámite por competencia a la directora de Talento Humano, a la Inspección General y al director de servicios especiales de la Policía Nacional.

El 13 de febrero de 2020, el director de protección y servicios especiales de la Policía Nacional da respuesta, mediante la que se le informa que esa dependencia no es competente para realizar un estudio de nivel de riesgo por corresponderle a la Unidad de Protección o la Fiscalía.

El 18 de febrero de 2020, el director de Talento Humano le informó que se seleccionó y recomendó al mayor Fabio William Acevedo Flórez, para presentar curso, previo al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel.

El 17 de febrero de 2020, radicó petición al director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, mediante la que explicó que el riesgo se origina en las denuncias realizadas contra funcionarios de la Policía Nacional.

El 26 de febrero de 2020, la subdirectora de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional le reitera la respuesta dada.

Aduce que al considerar que la respuesta emitida por el director de Talento Humano de la Policía Nacional es irregular, y no se da respuesta por parte de los funcionarios a los que se las dirigió el 3 de marzo de 2020, radicó petición por segunda vez dirigida al director general de la Policía Nacional radicado 018824, al subdirector general de la Policía Nacional radicado 018823, mediante los cuales solicita que debido a la gravedad de los hechos expuestos, las respuestas sean emanadas tanto del director como del subdirector de la Policía Nacional y no se proceda al traslado por competencia.

El 5 de marzo de 2020, a través de comunicación oficial S-2020-001666/SUDIRG-GRASE-1.10 el subdirector de la Policía Nacional le informó que remitió por competencia las peticiones, sin que se haya pronunciado respecto de la junta asesora que se realizaría en el mes de marzo de 2020.

Indica que el 25 de marzo de 2020, el director de Talento Humano de la Policía Nacional le dio una respuesta que considera evasiva.

De lo anterior, precisa que no se dio respuesta de fondo a las peticiones de 3 de febrero de 2020, 17 de febrero de 2020 y de 3 marzo de 2020.

**1.2. Pretensiones**

Amparar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad personal e igualdad.

Se realice el control de constitucionalidad por vía de excepción respecto de lo previsto en el parágrafo 8 del artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015, relativa a la asignación de medidas de seguridad y en consecuencia se le ordene al director de la Policía Nacional se le realice el estudio de nivel de riesgo y la consecuente asignación de medidas de protección.

Se dé respuesta por parte de la Unidad de Protección de la petición remitida por competencia el 26 de febrero de 2020.

Se dé respuesta por parte del director de la Policía Nacional de las peticiones realizadas de 3 de febrero de 2020, 18 de febrero de 2020 y de 3 marzo de 2020.

**1.3. Trámite procesal**

Recibida la acción constitucional mediante correo electrónico del 15 de abril de 2020, por auto del mismo día, se admitió la presente acción de tutela, providencia que fue debidamente notificada por correo electrónico.

En dicho proveído, se ordenó correr traslado por el término de 2 días, al Ministro de Defensa Nacional, al Director de la Policía Nacional y al Director de la Unidad Nacional de Protección**,** para pronunciarse sobre los hechos expuestos por el accionante.

Asimismo, se dispuso la vinculación a la presente acción constitucional del Subdirector de la Policía Nacional, al Inspector de la Policía Nacional, al Director de Talento Humano de la Policía Nacional y al Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

**1.4. Contestación de la acción constitucional**

**1.4.1 La Dirección de Talento Humano**

A través de los correos electrónicos del 21 de abril de 2020, la dirección de Talento Humano remitió documentación relativa a los hechos descritos por el accionante, no obstante, esa Dirección no efectuó pronunciamiento alguno respecto de las pretensiones del señor William Adenis Lancheros Casas.

**1.4.2. Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional**

La Directora de Protección y Servicios Especiales (E) de la Policía Nacional, se opuso a la protección de los derechos solicitados por el accionante, indicando la improcedencia de la acción constitucional por las siguientes razones:

En lo que concierne a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, es de indicar que, para el caso sub examine, el procedimiento de evaluar el nivel de riesgo y asignar Medidas de Protección, se encuentran establecidas en el Decreto 1066 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”* capitulo II “*Prevención y Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de personas, grupos y comunidades”* a partir del artículo 2.4.1.2.1 y hasta el artículo 2.4.1.2.52.

Indica que, en el artículo 2.4.1.2.40, del referido Decreto, se establece el procedimiento ordinario del programa de protección, determinando el nivel del riesgo en que se encuentra la persona que busca seguridad y fijando las medidas especiales y necesarias para salvaguardar sus derechos, por lo cual la valoración y definición de éstas, deben estar acordes a la situación de riesgo de la persona, por lo tanto, cada decisión debe fundamentarse en un estudio preliminar.

Explica que, de manera taxativa y no optativa establece que para determinar el riesgo en el que se encuentra la persona, en primer lugar se analiza y verifica que aquella pertenezca a la población objeto del programa de protección, posteriormente, se traslada la solicitud al cuerpo técnico de recopilación y análisis de información -CTRAI-, que se encarga de efectuar el estudio de campo sobre la situación de riesgo, el cual es presentado al Grupo de Valoración Preliminar -GVP- que analiza la situación del caso y presenta al Comité de evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM- la determinación del nivel de riesgo de la persona y el concepto sobre las medidas idóneas a implementar, el CERREM, que es el encargado de la valoración integral del riesgo analiza los casos presentados y valida la determinación del riesgo a partir de la información suministrada por el GVP, y recomienda las medidas de protección, que son implementadas por la Unidad Nacional de Protección – UNP- a través de acto administrativo.

De ello resulta necesario admitir, que la UNP es el organismo creado para analizar el riesgo en que se encuentra cada persona, y determinar cuáles resultan ser las medidas de protección idóneas y eficaces para cada caso en concreto, por lo cual resulta evidente que ante la existencia de un procedimiento específico para ingresar al programa de protección, en el cual se efectúa una valoración del riesgo de cada persona y se definen las medidas de protección necesarias e idóneas en cada caso en concreto, esta Jefatura considera que los derechos invocados por el accionante no han sido vulnerados por esta Dirección, puesto que la competencia asignada en dicha norma, tiene su fundamento en el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de determinadas personas en situaciones de riesgo y, en distinción de las competencias el Decreto 1066 de 2015, *“Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior"*, en su artículo 2.4.1.2.29.

Por otra parte, el Decreto 567 de 2016, "*Por el cual se modifican algunos artículos del Capítulo 2, Título 1, Parte 4, Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior artículo 3",* establece que la Policía Nacional define los procedimientos para realizar los estudios de seguridad en relación con la población objeto de protección en virtud del cargo, el tenor literal de la norma es el siguiente:

***“ARTÍCULO 3o.*** *Adiciónese un parágrafo 4o al numeral 1, y un parágrafo 2o al numeral 2, del artículo* [*2.4.1.2.11*](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1066_2015.htm#2.4.1.2.11)*, del Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, el cual quedará así:*

*“1. En virtud del riesgo.*

*PARÁGRAFO 4o. La Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional establecerán internamente los mecanismos para la realización de estudios de seguridad a instalaciones, en relación con las poblaciones objeto, definidas en el presente capítulo”.*

*“2. En virtud del cargo.*

*PARÁGRAFO 2o.* ***La Policía Nacional****, podrá bajo la suscripción de instrumentos de cooperación o convenios,* ***prestar el servicio de seguridad en las instalaciones gubernamentales****, así como en aquellas* ***de carácter diplomático****, estableciendo internamente los mecanismos para prestar el servicio.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).*

Señala que una lectura detenida del enunciado normativo transcrito nos permite evidenciar que, para la Policía Nacional, la población objeto del programa es única y exclusivamente en virtud del cargo; es decir, que lo contemplado en el artículo 2.4.1.2.7 del *Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior* respecto a las personas objeto de protección, quedó incólume, así:

1. *Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.*
2. *Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.*
3. *Los Ministros del Despacho.*
4. *Fiscal General de la Nación.*
5. *Procurador General de la Nación.*
6. *Contralor General de la República.*
7. *Defensor del Pueblo en el orden nacional.*
8. *Senadores de la República y Representantes a la Cámara.*
9. *Gobernadores de Departamento.*
10. *Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrados del Tribunal para la Paz; las Comisionadas y los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP; y el/la director/a de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado*
11. *Alcaldes distritales y municipales.*

En ese sentido, existen unos criterios de carácter imperativo que conducen a determinar la pertinencia de que una persona ingrese al programa de protección por parte de la Policía Nacional, dichos criterios son: La condición de población objeto (descrita en el párrafo anterior), y el principio de causalidad. Según éste, la inclusión al programa de prevención y protección estará fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales y/o humanitarias.

Indica que, en el presente asunto, los hechos generadores de la presente acción constitucional impetrada por el señor WILLIAM ADENIS LANCHEROS CASAS, datan por el temor que siente por su vida e integridad debido a las denuncias penales y disciplinarias efectuadas por las presuntas irregularidades que se presenta en la Dirección de Talento Humano – Área Desarrollo Humano – Grupo de Ascensos*;* sin embargo, lo pretendido en el escrito de tutela en el acápite VIII. SOLICITUDES, es que se le solicite a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, *“….* ***el motivo por el cual NO ha realizado el estudio de nivel de riesgo y/o pronunciado a la comunicación oficial*** *que fue remitida por competencia a ese despacho el día 26 de febrero de 2020, mediante comunicación oficial No. S-2020-005959/SUPRO-ARPRO, por parte de la señora coronel EMISE HANNETH GARCIA CUBILLOS como Subdirectora de Protección…”.*

Vislumbrándose claramente que, el señor WILLIAM ADENIS LANCHEROS CASAS, acude a la presente acción constitucional para proteger los derechos fundamentales señalados, presuntamente vulnerados por la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP.

Expone que una vez realizado el análisis jurídico respectivo es pertinente inferir que el accionante en el escrito de tutela, si bien es cierto menciona a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, también lo es que, tiene pleno conocimiento, que él no es población objeto de la Policía Nacional, demostrando los hechos atribuibles a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, salvo que en criterio de ese despacho la decisión de vinculación obedezca a la participación de esta Dirección como integrante del plurimencionado Comité, en compañía de las demás Entidades del Estado.

Manifiesta que al llegar a este punto, es conveniente mencionar que el accionante, mediante derecho de petición, radicado en la ventanilla única de la Dirección de General de la Policía Nacional, bajo el No. E-2020-008069-DIPON del 03 de febrero de 2020, solicitó al Subdirector General de la Policía Nacional *“…****NO seleccionar y NO recomendar*** *el nombre del señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ Jefe del Grupo de (sic) Asensos de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, para presentar concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel, hasta (sic) no sea resuelta su situación jurídica y disciplinaria, por el posible caso de corrupción, …”,* demostrando claramente que en ningún momento requirió medidas de protección a la Dirección de Protección y Servicios Especiales; sin embargo, fue enviado a este despacho mediante comunicación oficial No. S-2020-000913-SUDIR, el cual se respondió a través de comunicación oficial No. S-2020-004093-DIPRO-ASJUD, del 13 de febrero de 2020, que fue entregado en la portería del Conjunto residencial GRAN RESERVA DE OPORTO, el día 14 de febrero de 2020, a las 10:19 horas, tal como se observa en el anexo.

Por lo anterior, precisa que la Dirección de Protección y Servicios Especiales, respondió de manera clara, concreta, de fondo y forma coherente el derecho de petición radicado en la ventanilla única de la Dirección de General de la Policía Nacional, bajo el No. E-2020-008069-DIPON del 03 de febrero de 2020.

No obstante, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental de petición, esa dirección, mediante comunicación oficial No. S-2020-005959-DIPRO del 26 de febrero de 2020, corrió traslado de la petición a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, por ser un asunto de su dependencia.

**1.4.3 Dirección de la Policía Nacional**

Solicita se nieguen las pretensiones del accionante por cuanto a su juicio la Inspección General de la Policía no ha vulnerado los derechos del señor William Adenis Lancheros Casas, por cuanto se le ha dado respuesta a cada una de las peticiones.

Precisa que, de conformidad con lo definido por la Corte Constitucional, el hecho de que las respuestas a las peticiones no sean de conformidad con las pretensiones del peticionario, ello no significa que la autoridad vulnere el derecho fundamental de petición.

Hace un recuento tanto de las peticiones presentadas por el accionante como de las respuestas dadas a las mismas por parte de la Inspección General de la Policía Nacional de conformidad con su competencia, por lo que precisa que las identificadas con los números 008068, 008069, 008070, 018824, 018823 y 013288, corresponden a las Direcciones de Talento Humano y de Protección de la Policía Nacional, sin embargo, las radicadas con los números 008069 y 018823, esa Oficina de Control se pronuncia, sin que sea posible responder de la forma que el accionante lo pretende.

En ese punto precisa que lo expuesto por el accionante, está siendo investigado por las autoridades disciplinarias y judiciales, de tal manera que son esas las instancias que en el marco de la autonomía e independencia de cada proceso, las resolverán, sumado a que Procuraduría tiene conocimiento y debe decidir si asume o no poder preferente.

Explica que, así como se pronunció dentro del acción de tutela de la cual conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá, dentro del radicado 2020-00050, el accionante no puede pretender direccionar el desarrollo de la investigación, haciendo exigencias a través de derechos de petición sobre las facultades expresas de la autoridad con atribuciones disciplinarias, sin embargo, se le ha permitido aportar pruebas y, se ha dado respuesta a los requerimientos realizados.

Advierte que, la investigación disciplinaria por medio de la cual el hoy accionante, actúa como quejoso inició con la preliminar P-INSGE-2018-251 y posteriormente pasó a formal con el número INSGE-2019-24, la cual se encuentra vigente y goza de reserva legal.

Indica que, a la petición con radicado 018823 se dio respuesta por parte de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2020-006089 INSGE de fecha 27 de marzo de 2020, el cual fue entregado de manera física, así como al correo electrónico manifestado por el accionante.

Agrega que, se presenta la presunta temeridad en la acción de tutela, como quiera que, para el 13 de marzo de 2020, interpuso acción de tutela 2020-00050, ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, por medio de la cual, expuso hechos que giran en un mismo contexto, a los descritos en la presente acción constitucional.

Hace referencia a que no se encuentra acreditado que en el presente asunto el perjuicio irremediable del accionante.

Asimismo, explica la improcedencia de la acción de tutela por existencia de otro mecanismo de defensa judicial, para que el señor William Adenis Lancheros Casas en su momento cuestione las decisiones que esa dependencia realice dentro de la disciplinaria que aún está vigente y la participación activa que hasta el momento el accionante ha realizado no ha terminado conforme al artículo 90 de la Ley 734 de 2002, el cual establece:

*“PARÁGRAFO. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión.*

**1.4.4 Unidad Nacional de Protección**

El jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP se opuso a la acción de tutela y solicitó que la entidad sea desvinculada, como quiera que la entidad competente para pronunciarse es la Policía Nacional.

Explica que, revisada las bases de datos de esa entidad, se logró evidenciar que la Policía Nacional remitió una solicitud de protección a favor del señor William Adenis Lancheros Casas, frente a la que se adelantaron las siguientes gestiones administrativas:

-La Policía Nacional, mediante el oficio 005959 de 26 de febrero de 2020, corrió traslado de la solicitud de protección elevada por el señor William Adenis Lancheros Casas, petición a la que la UNP asignó el radicado EXT20-00020777 del 28 de febrero de 2020.

- La referida solicitud de protección fue remitida al Grupo de Solicitudes de Protección de la UNP, para su valoración, con el fin de determinar la vinculación al programa de protección que lidera esa Unidad.

-El Grupo de Solicitudes de Protección analizó la solicitud de protección del señor William Adenis Lancheros Casas, determinando que el accionante es mayor retirado de la Policía Nacional, en consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 8 del Artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015, el caso del Mayor (R) William Adenis Lancheros Casas, de la PONAL, no es población objeto del programa liderado por la UNP.

- El Grupo de Solicitudes de Protección mediante correo electrónico de fecha 22 de abril de 2020, remitió por competencia el caso del señor William Adenis Lancheros Casas al director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, la cual se envió con copia al correo electrónico del accionante.

Por lo expuesto, señala que esa entidad, respondió de manera oportuna, de fondo y congruente lo solicitado y la respuesta fue recibida en las bandejas electrónicas.

**2. CONSIDERACIONES**

La acción de tutela es un mecanismo procesal consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, cuya finalidad es la defensa y restablecimiento de los derechos fundamentales contra las infracciones o amenazas derivados de las acciones u omisiones de las autoridades o de los particulares en los eventos señalados en la ley.

Dicho artículo contempla:

*“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública…”.*

Así mismo, el precepto dispone que **sólo procederá esa acción cuando el afectado no disponga de otro medio de acción judicial**, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución enseña que toda persona puede a través de la acción de tutela, reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten conculcados o amenazados, ya sea por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares encargados de la prestación de un servicio público, siempre que no exista otro medio de defensa judicial que resulte idóneo para la protección de los citados derechos.

**2.1. Problema jurídico**

¿Se vulneran los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad personal e igualdad del señor William Adenis Lancheros Casas, por no darse respuesta de fondo por parte de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección a las peticiones realizadas de 3 de febrero de 2020, 18 de febrero de 2020 y de 3 marzo de 2020?

Para resolver el problema jurídico el Juzgado por utilidad conceptual atenderá los siguientes conceptos:

**2.2 El marco de la acción de tutela fijado por la Corte Constitucional**

En Sentencia T-328 de 2017, la Corte Constitucional, precisó que la acción de tutela procede de manera excepcional para proteger los derechos fundamentales y, en particular, los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los siguientes casos: *“(i) cuando no existe otro medio de defensa judicial o, en caso de existir, el mismo no resulta idóneo ni eficaz para garantizar la protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento en el que la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía y (ii) cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado*”. (Se resalta).

Bajo tal premisa resulta necesario advertir, en qué eventos se está frente a un perjuicio irremediable, en tanto que esa exigencia no se acredita con la manifestación del accionante, sino que como lo ha precisado la Corte Constitucional en Sentencia T- 106 de 2017, se debe demostrar: *“(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo**”.*

De lo expresado por la Alta Corporación, sí se acude a la acción de tutela sin precisar si se realiza de manera definitiva y cuenta con otro medio de defensa el aparo deviene improcedente, y cuando contando con los procesos pertinentes para la protección de los derechos, no se acredita el perjuicio irremediable, se torna igualmente improcedente.

**2.3 Subsidiariedad de la Acción de Tutela**

La Constitución Política en su artículo 86 establece que la tutela procederá únicamente cuando la persona que denuncia la vulneración de derechos fundamentales no cuente con otro medio judicial para la salvaguarda de sus derechos, a menos que se utilice la acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre este aspecto, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6 contempla las causales de improcedencia de la acción de tutela, entre las cuales enumera la existencia de otros medios de defensa judicial, para lo cual el operador de justicia debe analizar la eficacia del mecanismo ordinario para proteger los presuntos derechos afectados.

En este sentido, dado la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ésta no es una vía judicial adicional o paralela a los medios ordinarios judiciales o administrativos, en tanto el carácter de dicha acción es residual y sólo procede en caso que no existan mecanismos idóneos para satisfacer los derechos fundamentales pretendidos o que éstos no sean idóneos para evitar un perjuicios irremediable, caso en el cual la Tutela procede como mecanismo transitorio.

Frente a ello, el Consejo de Estado ha señalado:

*“Es decir que la acción de tutela no es una vía judicial adicional o paralela**a los mecanismos judiciales previstos por el Legislador, como tampoco puede ser tenida por las partes como la herramienta excepcional a la que se puede acudir para corregir los errores imputables a ellas, o como medio para revivir términos de quien ahora pretende accionar por esta vía Constitucional. (…). En conclusión, comoquiera que no se está frente a ninguna circunstancia que hagan procedente esta acción de tutela como mecanismo transitorio, se advierte que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa a los cuales puede acudir, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales que considera han sido vulnerados”.[[1]](#footnote-1)*

*“…en tanto la acción de tutela tiene carácter residual y, como en esta oportunidad el actor cuenta con otros medios de defensa de carácter administrativo y judicial, éstos son idóneos para satisfacer el derecho fundamental pretendido”[[2]](#footnote-2)*

Por lo tanto, la acción de tutela resulta improcedente para debatir los hechos planteados en la presenta acción, a menos que los mecanismos judiciales ordinarios carezcan de idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

**2.4 Del derecho de Petición**

El artículo 23 de la Constitución Política, establece lo siguiente:

*“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.*

En concordancia con lo anterior, los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establecen que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición y, por lo tanto, incluye el derecho a obtener una respuesta completa y de fondo.

Adicionalmente, la precitada normativa dispone que, de forma general, toda petición debe solucionarse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, salvo situaciones especiales; por ejemplo, cuando se trata de solicitudes relativas a documentos e información se dispondrá de diez (10) días y cuando se trate de consultas dirigidas a una entidad sobre las materias a su cargo treinta (30) días.

Finalmente, el parágrafo único de referenciado artículo 14, prevé que en aquellos casos en que la autoridad no pueda resolver una solicitud en los plazos señalados, deberá informarlo al interesado y, de todas formas, atenderla dentro un plazo razonable, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.

Por su parte, la Corte Constitucional determinó cuáles son los elementos esenciales del derecho fundamental de petición, así: (i) la formulación de la petición, esto es, la posibilidad de dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades y particulares, sin que les sea dada la oportunidad de negarse a recibirlas y tramitarlas[[3]](#footnote-3); (ii) la pronta resolución, ello significa, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término razonable[[4]](#footnote-4); una respuesta de fondo, o sea, la resolución definitiva de lo pedido, sea positivo o negativo, de forma clara (inteligible y de fácil comprensión), precisa (que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas[[5]](#footnote-5) congruente (abarque la materia objeto de la petición y sea conforme lo solicitado) y consecuente con el trámite surtido; y (iii) la notificación al peticionario, es decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, con motivo de su petición, se ha producido[[6]](#footnote-6) (Sentencia T – 048 de 2016[[7]](#footnote-7)).

**2.5 Derecho al debido proceso**

La jurisprudencia de la Corte Constitucional[[8]](#footnote-8), respecto al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, ha dispuesto que se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas con el fin de que todos los integrantes de la comunidad, puedan defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Constitución, definido como: *“****(i)*** *el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa,* ***(ii)*** *que guarda relación directa o indirecta entre sí, y* ***(iii)*** *cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “****(i)*** *asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,* ***(ii)*** *la validez de sus propias actuaciones y,* ***(iii)*** *resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”[[9]](#footnote-9)*

Del mismo modo ha señalado que existen unas garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso administrativo, así: *“****(i)****ser oído durante toda la actuación,****(ii)****a la notificación oportuna y de conformidad con la ley,****(iii)****a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas,****(iv)****a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación,****(v)****a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,****(vi)*** *a gozar de la presunción de inocencia,****(vii)*** *al ejercicio del derecho de defensa y contradicción,****(viii)****a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y****(ix)****a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.”[[10]](#footnote-10)*

En este orden de ideas, concluyó la Corte que cualquier transgresión a las garantías mínimas mencionadas anteriormente, atentaría contra los principios que gobiernan la actividad administrativa, (igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y contradicción) y vulneraría los derechos fundamentales de las personas que acceden a la administración o de alguna forma quedan vinculadas por sus actuaciones.

De acuerdo a lo expuesto, el debido proceso administrativo consagrado como derecho fundamental, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión; pues el papel de dicho derecho no es cumplir con las funciones descritas, sino que además, es un medio imprescindible para la realización de los demás derechos constitucionales.

**2.6 Derecho a la vida en relación con la seguridad personal**

El artículo 11 de la Constitución Política establece el derecho a la vida como fundamental y en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se la ha dado el carácter de derecho fundamental a la seguridad personal.

En este punto se advierte, que en sentencia T- 078 de 2013, la Corte precisó:

*“El carácter de valor constitucional, se colige del preámbulo de la Constitución, al indicar que fue voluntad del pueblo soberano asegurar la vida, la convivencia y la paz, y del artículo 2°, según el cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. De esta manera, ha estimado que la seguridad se constituye en uno de los puntos cardinales del orden público, en tanto “garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional”[[11]](#footnote-11).*

*También, ha precisado que la seguridad es un derecho colectivo, “es decir, un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (Art. 88, C.P.).”[[12]](#footnote-12)*

*Finalmente, ha considerado la seguridad como derecho individual, en la medida en que es “aquél que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a [amenazas] que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades del Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad.”[[13]](#footnote-13)*

*Ahora bien, el derecho a la seguridad no aparece expresamente nominado como fundamental en la Constitución, sino que ese estatus deriva de una interpretación sistemática de la Carta Fundamental (preámbulo, arts. 2°, 12, 17, 18, 28, 34, 44, 46 y 73 C.P.), y de diversos instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, en virtud del bloque de constitucionalidad (arts. 93 y 94 C.P), como son: (i) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7°, Nral. 1°), incorporada a la legislación colombiana mediante Ley 16 de 1972; y (ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°, Nral. 1°), aprobada mediante Ley 74 de 1968. Así mismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1°) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre internacional a partir de la promulgación de Teherán el 13 de marzo de 1968, aluden al derecho a la seguridad (art. 3°).*

*Bajo este contexto, la Corte ha precisado que el derecho a la seguridad personal, no se circunscribe exclusivamente a los casos en los que esté comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que en un momento dado puedan verse afectadas y que requieran protección por parte del Estado, concretamente la vida y la integridad personal (arts. 11 y 12 C.P), como derechos básicos para la existencia misma de las personas[[14]](#footnote-14). Conforme a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido ser la provisión efectiva de las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su contra.”[[15]](#footnote-15)*

*En suma, la seguridad debe ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y fundamental, precisándose respecto de este último, que se constituye en una garantía que debe ser preservada por el Estado, no circunscribiéndose su ámbito de protección a las personas privadas de la libertad, sino que también se extiende a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado requieren la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal.*

Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia T-244 de 2014 advirtió:

*“Como ya se dijo, es obligación del Estado amparar a las personas que se encuentran en situación de riesgo, sea cual fuere su circunstancia, que para el caso concreto exige tener en cuenta el ejercicio del cargo desempeñado por el accionante. Esta protección debe brindarse de manera oportuna, idónea y eficaz; vale decir, las medidas tienen que ser otorgadas de manera ágil y expedita, puesto que su propósito es prevenir la materialización de los riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación, al tiempo que deben ser adecuadas a la situación, adaptándose a las condiciones particulares de los protegidos. Asimismo, deben mantenerse mientras subsistan las circunstancias a que dieron lugar. En síntesis, la Sala evidencia que la entidad encargada de velar por la seguridad y protección del accionante no cumplió integralmente con su labor. Prueba de ello es la tardanza en adoptar las determinaciones respecto de su situación, así como haberlo dejado desprotegido intempestivamente (sin un esquema de seguridad) mientras evaluaba su caso, y una vez que determinó su nivel de riesgo omitió informarle los motivos que lo llevaron a adoptar tal decisión.”*

De tal manera que existe una relación ineludible entre el derecho a la vida y la seguridad personal, que son objeto de protección por el Juez de tutela dada la naturaleza de derechos fundamentales, imponiendo la carga a las correspondientes entidades del Estado, de evaluar oportunamente la situación de los administrados y su nivel de riesgo, para determinar si se hace necesaria o no su protección.

**2.5 Caso concreto**

El señor William Adenis Lancheros Casas, acudió a este mecanismo constitucional, a efectos de que le sean amparados los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad personal e igualdad y en consecuencia se dé respuestas de fondo a las peticiones presentadas el 3 y 18 de febrero y del 3 de marzo de 2020.

Lo primero que se establece por parte de esta primera instancia, es que la presente acción constitucional, resulta procedente respecto de la protección del derecho fundamental de petición, como quiera que está debidamente acreditado la presentación tanto de las solicitudes de 3 y 17 de febrero de 2020, como de las radicadas el 3 de marzo de 2020 a la Policía Nacional, respecto de las cuales se debe verificar que a las mismas se hubiese dado respuesta de manera efectiva y dentro de los términos dispuestos para ello.

En cuanto a lo referente al estudio de seguridad, el Juzgado advierte que previo a la presentación de la acción constitucional el accionante radicó 4 peticiones, 2 de ellas a la dirección de la Policía Nacional y las 2 restantes ante el Subdirector de la Policía Nacional, en las que solicitó la protección por parte de la Institución debido al riesgo que presenta por la gravedad de las denuncias presentadas en contra de oficiales de la Policía Nacional, de tal manera que el señor William Adenis Lancheros Casas, no acudió de manera directa a la acción constitucional sino que previamente agotó los medios ordinarios para solicitar el estudio de seguridad.

Aclarado lo anterior, procede el Despacho a determinar si en el presente asunto, el actuar de las accionadas vulneran los derechos fundamentales del señor William Adenis Acevedo Flórez, para cuyo propósito, se estudiarán las pruebas aportadas al plenario:

* El 28 de enero de 2020, el señor William Adenis Lancheros Casas, le solicitó al Inspector General de la Policía Nacional realizar la ruptura de la unidad procesal del radicado P-INSGE-2018-251(Fls. 238 a 245 archivo PDF anexos de tutela).
* El 3 de febrero de 2020, con radicados 008068, 008069 y 008070, el accionante le solicitó al director, subdirector de la Policía Nacional y al director de Talento Humano de esa entidad, no seleccionar y no recomendar al jefe de ascensos de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional para presentar concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel hasta tanto no se resuelva su situación jurídica y disciplinaria por posibles casos de corrupción, dentro de la investigación por falsedad en documento público en concurso heterogéneo y sucesivo con fraude procesal y realizó 12 peticiones adicionales (Fls. 1 a 66 archivo PDF anexos de tutela).
* El 3 de febrero de 2020, el subdirector general de la Policía Nacional, le informa al accionante que las peticiones realizadas por presuntas irregularidades en que pudieron incurrir algunos de los funcionarios del Área de Desarrollo Humano, Grupo de Ascensos, de conformidad con lo previsto en el Resolución 01471 del 6 de junio de 2011, en concordancia con el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, se dio trámite por competencia a la Dirección de Talento Humano (Fl.67 archivo PDF anexos de tutela).
* El 5 de febrero de 2020, el subdirector de la Policía Nacional realizó el traslado por competencia respecto de los numerales 02, 03, 04, 05 y 09 del radicado 2020-008069, al director de Talento Humano, inspector general y al director de Protección y Servicios Especiales de esa entidad (Fl 68 archivo PDF anexos de tutela).
* El 5 de febrero de 2020, el subdirector de la Policía Nacional realizó el traslado por competencia respecto de los numeral 06, 07 y 08 del radicado 2020-008069, al Inspector General de esa entidad (Fl. 69 archivo PDF anexos de tutela).
* El 5 de febrero de 2020, el subdirector de la Policía Nacional realizó el traslado por competencia respecto del numeral 11 del radicado 2020-008069, al director de Protección y Servicios Especiales de esa entidad (Fl. 70 archivo PDF anexos de tutela).
* El 12 de febrero de 2020, el jefe Grupo Procesos Disciplinarios Primera Instancia General da respuesta a la petición de 28 de enero de 2020 (Fls. 246 y 247 archivo PDF anexos de tutela).
* El 13 de febrero de 2020, el Director de Protección de Servicios Especiales, le informó al señor William Adenis Lancheros Casas que la protección por las denuncias realizadas contra funcionarios de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional no es de competencia de la Policía Nacional, por no ser el accionante objeto del programa de protección de esa entidad, por lo que debería solicitarlo a la Unidad de Protección o a la Fiscalía General de la Nación (Fls. 71 a 75 archivo PDF anexos de tutela).
* Con fecha del 18 pero radicada el día anterior, es decir el 17 de febrero de 2020, el accionante, radica petición por segunda vez dirigida al subdirector de la Policía Nacional, a la cual se le asignó el radicado 013288 (Fls. 87 a 102 archivo PDF anexos de tutela).
* El 18 de febrero de 2020, el señor William Adenis Lancheros Casas, presentó petición al inspector General de la Policía Nacional (Fls. 248 a 250 archivo PDF anexos de tutela).
* El 19 de febrero de 2020, el director de Talento Humano de la Policía Nacional dio respuesta a las peticiones del 3 de febrero de 2020, frente a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (Fls. 80 a 86 archivo PDF anexos de tutela).
* El 26 de febrero de 2020, la subdirectora de Protección de la Policía Nacional, da respuesta al accionante frente a la petición de protección y la remite por competencia a la Unidad Nacional de Protección por oficio de esa misma fecha (Fls. 113 y 114 archivo PDF anexos de tutela).
* El 2 de marzo de 2020, el jefe del Grupo Procesos Disciplinarios Primera Instancia, da respuesta al accionante respecto de la petición del 18 de febrero de 2020, (Fl. 251 archivo PDF anexos de tutela).
* El 3 de marzo de 2020, el accionante, radica petición por segunda vez dirigida al director de la Policía Nacional, a la cual se le asignó el radicado 018824 (Fls. 103 a 107 archivo PDF anexos de tutela).
* El 3 de marzo de 2020, el accionante, radica petición por segunda vez dirigida al subdirector de la Policía Nacional, a la cual se le asignó el radicado 018823 (Fls. 108 a 112 archivo PDF anexos de tutela).
* El 5 de marzo de 2020, el subdirector de la Policía Nacional da respuesta a la petición del 3 de marzo de 2020, advirtiendo la remisión por competencia a la Dirección de Talento Humano y a la Inspección General de la Policía Nacional (Fls. 115 a 117 archivo PDF anexos de tutela).
* El 25 de marzo de 2020, el director de Talento Humano de la Policía Nacional le informa al accionante que mediante comunicación oficial S-2020-010785/DITAH-ADEHU-1.10 del 19 de febrero de 2020, se dio respuesta concreta, precisa y de fondo a cada uno de los numerales enunciados nuevamente en la petición del 3 de marzo de 2020 ((Fls. 118 y 119 archivo PDF anexos de tutela).
* El 26 de marzo de 2020, el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá dentro del radicado 110013334004 2020 0050-00 amparó los derechos fundamentales del señor William Adenis Lancheros Casas y le ordenó al inspector general de la Policía Nacional dar respuesta la petición 363 de 28 de enero de 2020, “*esto es, a pronunciarse en relación con la solicitud de compulsar copias a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Defensa Nacional*” (Fls. 253 a 267 archivo PDF anexos de tutela).
* El 27 de marzo de 2020, el Inspector General de la Policía Nacional, da respuesta a la petición del accionante del 3 de marzo de 2020 (fls. 120 y 121 archivo PDF anexos de tutela).

Conforme a los hechos probados y las pruebas aportadas, el Despacho encuentra que el asunto objeto de examen en el presente asunto difiere respecto del trámite de tutela dado en el Juzgado 4 Administrativo de Bogotá, como quiera que revisado el fallo (Fls. 253 a 267 archivo PDF anexos de tutela), el mismo se concretó única y exclusivamente al estudio y valoración por la vulneración a los derechos al debido proceso y petición frente a las solicitudes realizadas por el señor William Adenis Lancheros Casas con ocasión a la presunta falta de respuesta de fondo a las peticiones de 28 de enero de 2020 y del **18 de febrero de 2020**, **radicado No. 000726, por medio de la cual solicita una información del proceso INSGR-2019-24** (fl.32 pdf tutela Juzgado 4), mientras que la protección solicitada dentro de la presente acción constitucional tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad personal e igualdad, frente a las peticiones de 3 de febrero, 17 de febrero, **18 de febrero radicado No. 13288, por medio del cual pide se otorguen unas medidas de protección** y 3 de marzo de 2020**,** precisando nuevamente que la del 18 de febrero de 2020, del cual conoce este Juzgado, se concreta al estudio de seguridad por parte de la Dirección de Protección de la Policía Nacional, de tal modo que no se presenta temeridad en la presentación de la presente acción constitucional, pues si bien se trata de algunas peticiones radicadas en la misma fecha, tienen radicados y asuntos diferentes.

Por otra parte, se advierte que el accionante ha venido presentando un sin número de peticiones a la Policía Nacional, por lo que el Despacho proceder a realizar su valoración, y así determinar si en efecto las peticiones respecto de las que solicita respuesta, han sido contestadas de fondo por la entidad o por el contrario se configura la vulneración que alega el accionante.

1. **Peticiones del 3 de febrero de 2020**

En este punto el Juzgado precisa que el contenido de las peticiones del 3 de febrero de 2020, radicados 008068, 008069 y 008070 tienen como fundamento los mismos hechos y las mismas peticiones, con diferencias exclusiva en el destinatario, esto es: i) el director de la Policía Nacional, ii) El subdirector de la Policía Nacional y iii) El director de Talento Humano de la Policía Nacional, respectivamente de tal manera que, por efectos metodológicos el Juzgado no procederá a realizar un estudio separado de las mismas, en tanto que la construcción de las solicitudes tienen identidad de hechos, fundamento y pretensiones, con la única modificación relevante en el destinatario.

Así las cosas, se analizará cada uno de los 12 puntos expuestos por el accionante, y la respuesta dada por la entidad accionada, de la siguiente manera:

“*PRIMERA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, fueron cometidas por algunos integrantes de la Policía Nacional entre ellos Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, el señor Coronel® JHON GONZALEZOCAMPO y el señor WILMERALFONSO VARGAS CARVAJAL, civil adscrito a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, y este último reconoció que él fue quien realizó algunos cambios de una de las actas que fueron alteradas y denunciadas (ver hecho 27), y en atención que los documentos que se adulteraron reposan en los archivos de los grupos que lideran estos oficiales, sin que a la fecha se hayan tomado decisiones de fondo, tal vez porque una vez llegan las peticiones y quejas, las direccionan para que sean firmadas las repuestas por subalternos como ya me sucedido en este caso, que terminó firmando la respuesta una Civil adscrita a la Dirección de Talento Humano y quien funge como secretaria, lo cual me pareció algo extraño por los anteriores argumentos solcito muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional que la respuesta sea firmada por usted, para así tener certeza que fue notificado de estos hechos irregulares al interior de la Policía Nacional.*

En este punto, la petición se concretó a que las respuestas estuvieran suscritas por el director, subdirector y director de Talento Humano de la Policía Nacional (Fls. 18, 40, 62 archivos PDF anexos de tutela).

En respuesta del 3 de febrero de 2020 (Fl. 67 archivo PDF anexos de tutela)., el subdirector general de la Policía Nacional, le informa al accionante a través del Oficio-2020 -000915, que a las peticiones realizadas por presuntas irregularidades en que pudieron incurrir algunos de los funcionarios del Área de Desarrollo Humano, Grupo de Ascensos, de conformidad con lo previsto en el Resolución 01471 del 6 de junio de 2011, en concordancia con el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, se dio trámite por competencia a la Dirección de Talento Humano.

En concordancia con lo anterior, el 5 de febrero de 2020, el subdirector de la Policía Nacional realizó el traslado por competencia a los funcionarios que a su juicio determinó eran los competentes para pronunciarse frente a las peticiones del señor William Adenis Lancheros Casas, de la siguiente manera: **i)** Mediante oficio S-2020 -00912 (Fl. 68 PDF anexos de tutela) la remitió al Director de Talento Humano de la Policía Nacional para que se pronunciara frente a los numerales 2, 3, 4, 5 y 9, **ii)** A través de Oficio S-2020 -000914 (Fl. 69 PDF anexos de tutela), se remitió al inspector General de la Policía Nacional, para que se pronunciara respecto de los numerales 6, 7 y 8 **iii)** Por Oficio S-00913 (Fl. 70 PDF anexos de tutela), se remitió al director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, para que se pronunciara respecto del numeral 11.

Conforme a lo expuesto, se procede a revisar las peticiones a cargo de cada uno de los funcionarios a los que se les remitió:

* **Peticiones a cargo de la Dirección de Talento Humano**

Al Director de Talento Humano se le asignó por competencia, dar respuesta a las peticiones 2, 3, 4, 5 y 9 referidas en los escritos del 3 de febrero de 2020, quien dio respuesta de manera directa en los siguientes términos:

*-“PRIMERA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, fueron cometidas por algunos integrantes de la Policía Nacional entre ellos Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, el señor Coronel® JHON GONZALEZOCAMPO y el señor WILMERALFONSO VARGAS CARVAJAL, civil adscrito a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, y este último reconoció que él fue quien realizó algunos cambios de una de las actas que fueron alteradas y denunciadas (ver hecho 27), y en atención que los documentos que se adulteraron reposan en los archivos de los grupos que lideran estos oficiales, sin que a la fecha se hayan tomado decisiones de fondo, tal vez porque una vez llegan las peticiones y quejas, las direccionan para que sean firmadas las repuestas por subalternos como ya me sucedido en este caso, que terminó firmando la respuesta una Civil adscrita a la Dirección de Talento Humano y quien funge como secretaria, lo cual me pareció algo extraño por los anteriores argumentos solcito muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional que la respuesta sea firmada por usted, para así tener certeza que fue notificado de estos hechos irregulares al interior de la Policía Nacional”.*

Respuesta: Se informa al peticionario que la respuesta a los tres oficios del asunto es suscrita por esta jefatura atendiendo lo establecido en el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, concordante con la Resolución 01362 del 11 de abril de 2019, “*Por la cual se define la estructura orgánica interna, y se determina las funciones de la Direcci6n de Talento Humano*".

El Juzgado encuentra que la respuesta es clara a la petición del accionante, por cuanto se le informan las razones normativas por las cuales se procede al traslado por competencia y no son respondidas cada una de las peticiones por parte del director general de la Policía Nacional. Asimismo, la respuesta está suscrita por el Director de Talento Humano de la Policía Nacional.

*-“SEGUNDA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, fueron cometidas por algunos integrantes de la Policía Nacional entre ellos el señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, y quien actualmente se le adelanta una investigación disciplinaria por parte de la Inspección General de la Policía Nacional, y otras por el Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar bajo la Preliminar 1315, otra por el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar bajo la Preliminar 1293 y otra para la fiscalía 158 seccional de Fe Pública bajo el radicado 110016000050201844072. Y debido a que el señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, se encuentra en evaluación de su trayectoria profesional. Como víctima y quejoso, SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE A MI GENERAL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, NO seleccionar y NO recomendar el nombre del señor Mayor FABIO WILLIAMACEVEDOFLOREZ Jefe del Grupo de Asensos de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, para presentar concurso previo curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel, hasta que no sea resuelta su situación jurídica y disciplinaria por el posible caso de corrupción del señor Mayor y Otros, en la investigación por la FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO Y EL CONCURSO HETEROGENEO Y SUCESIVO CON FRAUDE PROCESAL, ya que las actas de las sesiones de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional denunciadas, fueron incorporadas a los procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, las cuales fueron modificadas las hojas previas a las firmas una vez se firmaron por el señor Ministro de Defensa.*

-Respuesta: “Con respecto a no seleccionar y no recomendar el nombre del señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, para presentar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel, es preciso informar al peticionario que en atención al artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000, dicha decisión es de competencia directa de las respectivas juntas que intervienen en el procedimiento de Evaluación de Trayectoria Profesional, como lo son: La Junta de Evaluación y Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional, (Resoluci6n 04611 de 2018), la Junta de Generales (Resoluci6n 03593 de 2001) y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional (Decreto 1512 de 2000); cuerpos colegiados autónomos que actúan en el marco de sus funciones y competencias frente al procedimiento de Evaluación de la Trayectoria Profesional”.

Frente a no seleccionar el oficial referido en la petición, el Despacho resalta que, si bien se presenta inconformidad por parte del accionante, la dirección de Talento Humano es clara en precisarle la forma en que se procede con los ascensos al interior de la Institución, de tal manera que no se presenta la vulneración al derecho de petición.

Por otra parte, frente a las irregularidades a que pueda concluir el accionante, en el proceso de selección de oficial, el camino establecido para cuestionamiento de dicho procedimiento y los actos administrativos que de ello se deriven no es el derecho de petición sino los medios disciplinarios y de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el CPACA, según sea el caso y el acto respecto del cual se depreca.

*- “TERCERA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, las puse en conocimiento del señor Director de Talento Humano mediante derecho de petición el 10 de mayo de 2018 con radicado No. 043620 solicité puntualmente se me dejara realizar una inspección al original del acta No.009ADEHU-GRUAS-2.25APROP-GRURE-3.22 del 04 de julio de 2017 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, por parte de un perito en documentos cuestionados un delegado de la Personería de Bogotá y un veedor público, del cual recibí respuesta por medio de la comunicación oficial No. S-2018-026827/ADEHU-GRUAS-1.10 firmada por el señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, quien me informa que no se podía realizar dicha solicitud, sino por orden judicial y que debía informar el número de proceso y la orden. SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se me informe si este funcionario señor Mayor FABIO WILIAM ACEVEDO FLOREZ quien firmo las respuestas a estas peticiones en las que solicitaba la inspección de las actas para ser aportadas a los diferentes procesos, puso en conocimiento esta irregularidad o si por el contrario guardó silencio. Lo anterior ya que estas respuestas firmadas por este oficial a esta solicitud de inspección obran en las diferentes investigaciones penales, disciplinaria y de lo contencioso administrativo igualmente solicito se me informe cual es el procedimiento en este tipo de casos una vez se pone en conocimiento de un servidor público una novedad como esta.*

-Respuesta: “Es preciso informar al peticionario, que una vez consultado el Gestor de Contenidos Policiales "GECOP", se pudo establecer que la petición radicada bajo No. E-2018-043620-DIPON de fecha 10 de mayo de 2018, fue recepcionada el día 10/05/2018 por el Jefe del Área de Desarrollo Humano de la Dirección de Talento Humano, señor Coronel (RP) JHON JAIRO GONZALEZ OCAMPO, quien la remite por competencia al Grupo Ascensos; en virtud de lo anterior se concluye, que el superior jerárquico del señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, tenía conocimiento de la petición incoada, como también que en función y en ejercicio del cargo, el Jefe del Grupo Ascensos del Área de Desarrollo Humano de la Dirección de Talento Humano, emitió la comunicación oficial No. S-2018-026827/ADEHU-GRUAS-1.1 de fecha 16/05/2018, por medio de la cual se da respuesta al derecho de petición

Frente a las quejas presentadas en contra de un miembro de la institución, se deben seguir los parámetros establecidos en la Resolución No 01475 del 22/04/2019, "Por la cual se crea el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes en la Policía Nacional", no obstante, y como ya lo indicó en su petición, a la fecha los hechos informados son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por parte de las diferentes autoridades competentes”.

En este punto, el Juzgado advierte que se da respuesta de fondo a la petición, como quiera que la misma se concreta a establecer si el mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ puso o no en conocimiento las presuntas irregularidades, en este sentido, pese a que no se precisa si se informó o no por parte del mencionado mayor, se indica que dicha petición fue recibida por su superior, es decir, el Jefe del Área de Desarrollo Humano de la Dirección de Talento Humano, señor Coronel (RP) JHON JAIRO GONZALEZ OCAMPO, por lo cual se infiere que el mismo conoció el contenido de la misma; así como también respecto del procedimiento le indica que los hechos informados ya son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por parte de las diferentes autoridades competentes .

*-“CUARTA: SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se ORDENE la reubicación del señor Mayor FABIO WILIAM ACEVEDO FLOREZ Jefe de Ascensos de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y de su secretario el señor WILMER ALFONSO VARGAS CARVAJAL, civil adscrito a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, mientras se adelantan las investigaciones ya que ha pasado más de dos años y no se han tornado medidas de fondo, lo anterior con el fin de evitar que intervengan en las mismas, puesto que continúan en los mismos cargos y tienen la custodia o archivo de estos documentos públicos lo anterior con el fin de evitar que puedan realizar alguna actuación para tratar de ocultar lo aquí denunciado.*

-Respuesta: “Es pertinente informar, que la ubicación laboral, corresponde al perfil, competencia, experiencia del personal y necesidades del servicio, en pro del correcto desempeño en las funciones propias de cada cargo, enfocando los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos que demandan la misionalidad institucional, lo anterior teniendo como eje principal, la Política de gestión del talento humano y cultura institucional, como también con estricta observancia del artículo 40 del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000, el artículo 53 del Decreto 1792 del 14 de septiembre de 2000 y la Resolución No. 06665 de fecha 20 de diciembre de 2018 "*Por la cual se establecen los lineamientos Institucionales para las Destinaciones, Traslados y Comisiones en la administración pública y entidades privadas del personal de la Policía Nacional de Colombia*", por consiguiente, la ubicación del personal corresponde a criterios objetivos descritos en la ley y los reglamentos internos y no a criterios o apreciaciones subjetivas”.

El Juzgado considera que la respuesta dada por el director de Talento Humano es clara y precisa respecto de la forma y procedimiento en que se realizan los traslados y la competencia para ello, máxime cuando no se tiene conocimiento que dentro de los procedimientos disciplinarios y penales se hubiese tomado alguna decisión al respecto, por lo que el hecho de no acceder a lo solicitado por sí solo, no comporta vulneración al derecho de petición.

*-“QUINTA: SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se me informe si el señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ Jefe de Ascensos de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional se ha declarado impedido para realizar el procedimiento de evaluación de la trayectoria profesional del curso al que él pertenece, lo anterior ya que con la gran cantidad de irregularidades e investigaciones en curso por las anomalías en sus funciones, si fuera una persona íntegra y honesta solicitaría su impedimento para que sea otro oficial el que realice tal estudio de evaluación de la trayectoria profesional de esos oficiales, y así ser presentada ante la Junta de Evaluación y Clasificación de Oficiales, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministro de Defensa para la Policía Nacional.*

-Respuesta: “AI respecto me permito informar, que mediante oficio de fecha 03 de octubre de 2019, el señor Mayor FABIO WILLIAM ACEVEDO FLOREZ, solicitó al señor Teniente Coronel MAURICIO ANDRES CARRILLO ALVAREZ, Jefe del Área de Desarrollo Humano, no ejerce las funciones propias como Jefe del Grupo Ascensos frente al procedimiento de Evaluación de la Trayectoria Profesional, en atención a que hace parte del grupo de oficiales a quienes se les adelantará dicho procedimiento, aun cuando dicha jefatura no realiza el estudio de la Evaluación de la Trayectoria Profesional, por ser de exclusiva competencia de las juntas que intervienen en el procedimiento.

Por lo anterior, mediante nota interna el jefe del Área de Desarrollo Humano designó tal responsabilidad al señor Capitán WILMER RIVAS ARENAS, Responsable de Ascensos”.

En este punto, el Despacho advierte que la respuesta dada es clara y precisa respecto de lo acontecido con el jefe del Grupo Ascensos, por lo que no se presenta la vulneración al derecho de petición.

-“SEXTA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, fueron cometidas por algunos integrantes de la Policía Nacional y civiles al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención a la denuncia penal que instauré ante la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar por la falsedad del acta No. 001-ADEHU-GRUAS-2.25// APROP GRURE3.22 del 09 de febrero de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, investigación que por reparto le fue asignada al Juzgado 141 de Instrucción Penal Militar y que alegando no ser el competente la remitió a la Fiscalía General de la Nación siendo asignada a la fiscalía 158 seccional de Fe Publica, bajo el radicado 110016000050201844072, y de la cual no se ha aperturado la investigación disciplinaria formal al señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMÍNGUEZ, quien fungió como Jefe Grupo de Reubicación Laboral, Retiros, Reintegros (E), y que para el día 16 de mayo de 2018, mediante comunicación oficial No. 026944/DITAH-APROP-GRURE-1.10, me hace entrega de algunos folios del acta aquí mencionada, y al evidenciar las irregularidades del acta No. 001-ADEHU-GRUAS-2.25 // APROP-GRURE-3.22 del 09 de febrero de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, solicite al señor Director de Talento Humano de la Policía Nacional se me permitiera la realización de la Inspección del acta en compañía de un perito en documentos cuestionados, un delegado de la Personería de Bogotá y un veedor público, pero el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ es quien firma la respuesta y no el señor Director de Talento Humano, por lo anterior solicito muy respetuosamente se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie la investigación contra este oficial y esa institución asuma el poder preferente y se vincule adicionalmente al señora Patrullera YANETH PEREZ ARAQUE, quien elaboró el documento y finalmente al señor Teniente JESUS FERNANDO LEON GOMEZ quien figura que reviso mencionado documento.

-SÉPTIMA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, las puse en conocimiento del señor Director de Talento Humano, mediante derecho de petición el 27 de junio de 2018 con radicado No. 060067,48 solicite puntualmente se me dejara realizar una inspección al acta original No. 001-ADEHU-GRUAS-2.25 // APROP-GRURE-3.22 del 09 de febrero de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional por parte de un perito en documentos cuestionados, un delegado de la Personería de Bogotá y un veedor público, de lo cual respuesta por medio de la comunicación oficial No S-2018-037639/DITAH-APROP-GRURE 1.10 siendo elaborado mencionado documento por la Patrullera YANETH PEREZ ARAQUE, revisado por el señor Teniente JESUS FERNANDO LEON GOMEZ y firmado por el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ, quien me informa que no se podía realizar dicha solicitud, sino por orden judicial y que debía informar el número de proceso y la orden Por todo lo anterior SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se me informe si este funcionario el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ quien firmo las respuestas a estas peticiones las que solicitaba la inspección del acta para ser aportada a los diferentes procesos, puso en conocimiento esta irregularidad o si por el contrario guardo silencio. Lo anterior ya que estas respuestas firmadas por este oficial a esta solicitud de inspección obran en las diferentes investigaciones penales y de lo contencioso administrativo. Igualmente solicito se me informe cual es el procedimiento en este tipo de casos una vez se pone en conocimiento de un servidor público una novedad como esta”.

-Respuestas: “Es preciso informar al peticionario, que una vez consultado el Gestor de Contenidos Policiales "GECOP”, se pudo constatar que los derechos de petición bajo radicados No. E-2018- 040360-DIPON de fecha 02 de marzo de 2018 y No. E-2018-060067-DIPON del 27 de junio de 2018, fueron contestados por el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ en ejercicio y función del cargo que desempeñaba como jefe encargado del Grupo de Reubicación Laboral, Retiros, Reintegros, mediante las comunicaciones oficiales No. S-2018- 026944 DITAH del 16 de mayo de 2018 y No. S-2018-037639-DITAH del 12 de julio de 2018.

No obstante, y como ya lo indicó usted en su petición, los hechos informados están siendo investigados por las autoridades competentes; ahora bien, en uso de sus derechos constitucionales, será de su libre determinación, informar a la Procuraduría General de la Nación lo que a su juicio considere pertinente”.

-“OCTAVA: En atención que los hechos aquí denunciados revisten una alta gravedad al interior de la Policía Nacional, SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se ordene o solicite a quien corresponda la intervención inmediata del proceso P-INSGE-2018-251 adelantado por la Inspección General de la Policía Nacional y se solicite el poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para que sea esta institución imparcial que pueda actuar en derecho, debido a que la queja inicial en 90 folios se extravió y como quejoso la reconstruí hace más de un año, y a la fecha la investigación no ha tenido ningún avance, sino las pruebas adicionales que he aportado mediante derecho de petición. Lo anterior se puede verificar por medio de la bitácora del caso, que debe ser llevada por el funcionario instructor”.

-Respuesta: “Para la Policía Nacional, es prioritario enmarcar los comportamientos éticos y disciplinarios del personal, conforme a la Política Integral de Trasparencia Policial, la cual demanda de todos los miembros de la institución, actuar bajo principios de transparencia, rectitud, probidad, ética y respeto durante y fuera del servicio; en consecuencia y en virtud de lo establecido en el Decreto 4222 del 2006, es función de la Inspección General de la Policía Nacional, ejercer las atribuciones disciplinarias en materia de Investigación y sanción frente a Ios posibles hechos informados en la petición, por tal razón, dicha solicitud fue remitida a esa unidad por la Subdirección General de la Policía Nacional a través del Gestor de comunicaciones Policiales "GECOP", (comunicación oficial No. S-2020-000914-SUDIR).

Se reitera al peticionario que, en uso de sus derechos constitucionales, será de su libre determinación informar a la Procuraduría General de la Nación lo que a su juicio considere pertinente”.

El Juzgado advierte que, si bien se dio respuesta por parte del Director de Talento Humano de la Policía Nacional, solo se informó la remisión a la Inspección General de la Policía Nacional, quien ejerce las atribuciones disciplinarias en materia de Investigación y sanción frente a Ios posibles hechos informados en la petición en este sentido y teniendo en cuenta que fue al **Inspector General de la Policía Nacional** a quien le fueron asignadas por competencia también por parte del Subdirector de la Policía Nacional**,** es dicho Inspector quien debe pronunciarse de manera clara y precisa respecto de las peticiones 6, 7 y 8; en este sentido se protegerá el derecho fundamental de petición.

*-“NOVENA: SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se me informe si usted tenía conocimiento de estos hechos criminales al interior de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y en el evento que se conocieran las irregularidades que actuaciones se adelantaron a fin de mitigar las mismas, finalmente porque algunos de los funcionarios vinculados a estos hechos tan bochornosos continúan en los mismos cargos, aun cuando la agencia de noticias caracol denunció el 09/07/2019 mediante una noticia en la que dice "Ascensos en la Policía “SITIADOS" por corrupción, cobran por ascenso de un oficial entre 20 y 100 millones de pesos de acuerdo a cada caso particular, igualmente ascienden uniformados condenas como es el caso de la Mayor María González* [*https://caracol.com.co*](https://caracol.com.co) */radio/2019/07/nacional/1562685367\_053042.html”*

-Respuesta: En consecuencia, me permito informar que las conductas descritas en su petición están siendo investigadas penal y disciplinariamente por las autoridades competentes, siendo importante resaltar que esta Dirección estará atenta y dispuesta a cualquier requerimiento que en el marco de las investigaciones dispongan dichas autoridades.

-“DECIMA: SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional que en el evento que no se puedan responder algunas de mis peticiones respetuosas, se me informe los argumentos en derecho y el motivo por el cual no es posible dar respuesta, y si es por reserva de información que la misma sea enviada al Tribunal Superior de Bogotá, para que ese máximo órgano judicial sea quien dirima si efectivamente hay tal reserva”.

-Respuesta: “Es menester informar al peticionario que, de acuerdo a la competencia de la Dirección de Talento Humano, esta jefatura dio respuesta a través de la presente comunicación oficial a cada uno de los interrogantes planteados en el derecho de petición”.

El Juzgado considera que la respuesta es clara frente al conocimiento de los hechos por parte de la Policía Nacional, sin embargo, como se advirtió por este Despacho, al calificar la respuesta dada a la primera petición se presenta la asignación por competencias en el Policía Nacional, de tal manera que no todas las solicitudes las debe resolver de manera directa el director de la Policía Nacional, razón por la cual en las diferentes peticiones realizadas por el accionante el subdirector de la Policía Nacional ha procedido a calificar la competencia de cada dependencia asignándola y notificando de esa decisión al accionante, por lo que no se configura la vulneración al derecho de petición.

-“DECIMAPRIMERA: SOLICITO a mi General Director General de la Policía Nacional que en el evento que me llegare a suceder algo, respecto a daos en mi vida e integridad personal, se responsabilice a estos funcionarios públicos. Ello atendiendo que en este país es muy normal que a las personas que denuncias hechos de corrupción buscan silenciarlas”.

-Respuesta: “Esta solicitud fue remitida por competencia a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, por la Subdirección General de la Policía Nacional a través del Gestor de Comunicaciones Policiales “GECOP” (comunicación oficial No. S-2020-000913-SUDIR).

El Juzgado advierte que no se vulnera el derecho de petición por parte de la Dirección de Talento Humano, por cuanto se procedió a trasladarla por competencia, solicitud que se desarrollará más adelante.

* **Peticiones a cargo de la Inspección General de la Policía**

Como se indicó, lo relativo a las peticiones 6 a 8 fueron asignadas por competencia al inspector general de la Policía, es decir respecto de las siguientes:

*-“SEXTA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, fueron cometidas por algunos integrantes de la Policía Nacional y civiles al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención a la denuncia penal que instaure ante la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar por la falsedad del acta No. 001-ADEHU-GRUAS-2.25// APROP GRURE3.22 del 09 de febrero de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, investigación que por reparto le fue asignada al Juzgado 141 de Instrucción Penal Militar y que alegando no ser el competente la remitió a la Fiscalía General de la Nación siendo asignada a la fiscalía 158 seccional de Fe Publica, bajo el radicado 110016000050201844072, y de la cual no se ha aperturado la investigación disciplinaria formal al señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMÍNGUEZ, quien fungió como Jefe Grupo de Reubicación Laboral, Retiros, Reintegros (E), y que para el día 16 de mayo de 2018, mediante comunicación oficial No. 026944/DITAH-APROP-GRURE-1.10, me hace entrega de algunos folios del acta aquí mencionada, y al evidenciar las irregularidades del acta No. 001-ADEHU-GRUAS-2.25 // APROP-GRURE-3.22 del 09 de febrero de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, solicite al señor Director de Talento Humano de la Policía Nacional se me permitiera la realización de la Inspección del acta en compañía de un perito en documentos cuestionados, un delegado de la Personería de Bogotá y un veedor público, pero el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ es quien firma la respuesta y no el señor Director de Talento Humano, por lo anterior solicito muy respetuosamente se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie la investigación contra este oficial y esa institución asuma el poder preferente y se vincule adicionalmente a la señora Patrullera YANETH PEREZ ARAQUE quien elaboró el documento y finalmente al señor Teniente JESUS FERNANDO LEON GOMEZ quien figura que revisó el mencionado documento.*

*-SEPTIMA: Atendiendo que las presuntas conductas criminales y disciplinables aquí denunciadas, las puse en conocimiento del señor Directo de Talento Humano, mediante derecho de petición el 27 de junio de 2018 con radicado No. 060067,48 solicite puntualmente se me dejara realizar una inspección al acta original No. 001-ADEHU-GRUAS-2.25 // APROP-GRURE-3.22 del 09 de febrero de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional por parte de un perito en documentos cuestionados, un delegado de la Personería de Bogotá y un veedor público, de lo cual respuesta por medio de la comunicación oficial No S-2018-037639/DITAH-APROP-GRURE 1.10 siendo elaborado mencionado documento por la Patrullera YANETH PEREZ ARAQUE, revisado por el señor Teniente JESUS FERNANDO LEON GOMEZ y firmado por el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ, quien me informa que no se podía realizar dicha solicitud, sino por orden judicial y que debía informar el número de proceso y la orden Por todo lo anterior SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se me informe si este funcionario el señor Capitán RUBEN DARIO MURCIA DOMINGUEZ quien firmo las respuestas a estas peticiones las que solicitaba la inspección del acta para ser aportada a los diferentes procesos, puso en conocimiento esta irregularidad o si por el contrario guardo silencio. Lo anterior ya que estas respuestas firmadas por este oficial a esta solicitud de inspección obran en las diferentes investigaciones penales y de lo contencioso administrativo. Igualmente solicito se me informe cual es el procedimiento en este tipo de casos una vez se pone en conocimiento de un servidor público una novedad como esta.*

*-OCTAVA: En atención que los hechos aquí denunciados revisten una alta gravedad al interior de la Policía Nacional, SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional, se ordene o solicite a quien corresponda la intervención inmediata del proceso P-INSGE-2018-251 adelantado por la Inspección General de la Policía Nacional y se solicite el poder preferente a la Procuraduría General de la Nación para que sea esta institución imparcial que pueda actuar en derecho, debido a que la queja inicial en 90 folios se extravió y como quejoso la reconstruí hace más de un año, y a la fecha la investigación no ha tenido ningún avance, sino las pruebas adicionales que he aportado mediante derecho de petición. Lo anterior se puede verificar por medio de la bitácora del caso, que debe ser llevada por el funcionario instructor”.*

Al respecto se advierte, que a pesar de haber sido trasladada la petición por parte del subdirector de la Policía Nacional, no obra respuesta dada a las referidas peticiones por parte del Inspector General de la Policía Nacional, por lo que se configura la vulneración al derecho de petición.

* **Peticiones a cargo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales**

*“DECIMA: SOLICITO muy respetuosamente a mi General Director General de la Policía Nacional que en el evento que no se puedan responder algunas de mis peticiones respetuosas, se me informe los argumentos en derecho y el motivo por el cual no es posible dar respuesta, y si es por reserva de información que la misma sea enviada al Tribunal Superior de Bogotá, para que ese máximo órgano judicial sea quien dirima si efectivamente hay tal reserva”.*

Esta petición fue trasladada por competencia tanto por el subdirector de la Policía Nacional (Fl 68 archivo PDF anexos de tutela), como por el director de Talento Humano de esa Institución.

Mediante oficio S-2020-004093 del 13 de febrero de 2020, el director de Protección y Servicios Especiales le informó al señor William Adenis Lancheros Casas que la protección por las denuncias realizadas contra funcionarios de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional no es de competencia de la Policía Nacional, por no ser el accionante objeto del programa de protección de esa entidad, por lo que debería solicitarlo a la Unidad de Protección o la Fiscalía General de la Nación (Fls. 71 a 75 archivo PDF anexos de tutela).

El accionante, consideró que la Policía Nacional, no había dado respuesta a las peticiones del 3 de febrero de 2020, por lo que nuevamente, procedió a radicar peticiones el 18 de febrero de 2020 y 3 de marzo de 2020, que procede analizar el Juzgado:

1. **Petición radicada el 17 de febrero de 2020**

Se advierte que si bien se dirigió petición mediante escrito con fecha del 18 de febrero de 2020, pero el mismo se radicó el día anterior a dicha fecha, es decir el 17 de febrero de 2020 (Fls. 87 a 102 pdf anexos de tutela), al cual se le asignó el radicado 013288, en el cual el señor William Adenis Lancheros Casas le solicitó al subdirector general de la Policía Nacional lo siguiente:

*“1. Siendo la Policía Nacional la institución generadora del riesgo, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional y/o quien haga sus veces, se me informe que cual es el procedimiento para este tipo de casos a fin de garantizar el derecho a la seguridad personal y a la vida de un exfuncionario público que perteneció a la Policía Nacional y que adquiere un riesgo derivado de las funciones propias por causa de la institución cuando ejerció como miembro de esa institución.*

*2. Siendo la Policía Nacional la institución generadora del riesgo, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional y/o quien haga sus veces, se revise detalladamente mi caso analizando una a una las diferentes denuncias de carácter penal, quejas disciplinarias y demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de garantizarme de manera integral mi derecho a la vida e integridad personal y a la seguridad personal*

*3. Siendo la Policía Nacional la institución generadora del riesgo, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional y/o quien haga sus veces, en el evento que ustedes no lleguen a ser los competentes se remita por competencia todo mi expediente a la entidad o entidades que ustedes consideren, y así se me pueda garantizar mi derecho a la vida e integridad personal y a la seguridad personal.*

*4. Siendo la Policía Nacional la institución generadora del riesgo, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional y/o quien haga sus veces, se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar mi vida e integridad personal por parte de la Policía Nacional como Institución Generadora del Riesgo, mientras se establece que entidad es la que debe realizar este estudio de nivel de riesgo, lo anterior con el fin de garantizar mis derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la seguridad personal.*

*5 Siendo la Policía Nacional la institución generadora del riesgo, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional y/o quien haga sus veces, que en el evento que no se pueda dar respuesta a alguna de mis peticiones, se me informe los argumentos en derecho y el motivo por el cual no es posible dar respuesta, lo anterior con el fin de garantizar mis derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la seguridad personal”.*

Mediante oficio S-2020-005961 del 26 de febrero de 2020 (Fl. 113 archivo PDF tutela), la subdirectora de Protección de la Policía Nacional le informó al accionante que el Estado tiene diferentes programas de protección para atender la petición realizada y determinó que para ello puede acudir o bien a la Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Protección.

Hizo referencia a lo previsto en el Decreto 1066 de 2015, para indicar que la entidad no tiene competencia para la protección del accionante y que remitiría su solicitud a la Unidad Nacional de Protección.

A través del oficio S-2020-005959 del 26 de febrero de 2020 (Fl. 114 archivo PDF tutela), el Subdirector de Protección remitió por competencia la petición del señor William Adenis Lancheros Casas a la Unidad Nacional de Protección.

Al respecto conviene precisar que el Director de la Unidad Nacional de Protección al dar respuesta a la acción constitucional mediante correo electrónico del 22 de abril de 2020, frente a la competencia de esa entidad, precisó lo siguiente:

- El señor William Adenis Lancheros Casas no pertenece a ninguna de las poblaciones objeto de protección que lidera esa Unidad.

- Las presuntas amenazas de las que es objeto el señor William Adenis Lancheros Casas, no tienen relación con alguna actividad sindical, social o política en relación con el conflicto interno armado en Colombia y, en ese sentido no hay nexo causal, este no existe, toda vez que se evidencia que presuntamente lo están amenazando por un conflicto interno dentro de la Policía Nacional.

**-** El parágrafo 8 del Artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015, que en su tenor literal reza: “(…) El Director General de la Policía Nacional de Colombia organizará internamente la asignación de medidas de protección para los Oficiales Generales activos, retirados y demás servidores de la Institución que así lo requieran (…)”.

- La Unidad Nacional de Protección, resalta que de probarse un perjuicio irremediable, la Entidad competente para conocer de la presunta problemática que vive el señor William Adenis Lancheros Casas, es la Policía Nacional, para que, en el desarrollo de la política general de convivencia y seguridad ciudadana, se determinen las medidas preventivas y proactivas que se estimen pertinentes, con el propósito de evitar la posible vulneración de bienes jurídicamente tutelados, que escapan de la competencia del programa especial de protección liderado por esa entidad.

De conformidad con lo expresado por la Unidad Nacional de Protección, la misma no tiene competencia para brindarle seguridad al accionante respecto de las amenazas que presenta. De tal manera que resulta relevante realizar la revisión de lo previsto en el Decreto 1066 de 2015.

Así, advierte el Juzgado que el Decreto 1066 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, en su Artículo 2.4.1.2.7 y parágrafo 8 establecen lo siguiente:

***Protección de personas en virtud del cargo.****Son personas objeto de protección en virtud del cargo.*

*1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.*

*2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.*

*3. Los Ministros del Despacho.*

*4. Fiscal General de la Nación.*

*5. Procurador General de la Nación.*

*6. Contralor General de la República.*

*7. Defensor del Pueblo en el orden nacional.*

*8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara.*

*9. Gobernadores de Departamento.*

*10.*[*Modificado por el art. 3, Decreto 1487 de 2018.*](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80643#3)*<El nuevo texto es el siguiente> Magistrados de la Corte Constitucional; Corte Suprema de Justicia; Consejo de Estado; Consejo Superior de la Judicatura; Magistrados del Tribunal para la Paz; las Comisionadas y los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP; y el/la director/a de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.*

*(…)* ***Parágrafo 8.****El Director General de la Policía Nacional de Colombia organizará internamente la asignación de medidas de protección para los Oficiales Generales activos, retirados* ***y demás servidores de la Institución que así requieran****. Así mismo, el Comandante General de las Fuerzas Militares organizará internamente el tema en relación con los miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo o en retiro que lo necesiten.*

Considera esta primera instancia, de una interpretación teleológica de la norma, las medidas de protección no se concretan de manera exclusiva y única en los generales retirados de la Policía Nacional, en tanto que el parágrafo 8 en cita, también comprende a las personas en retiro diferentes del grado de general, de tal manera que no podría pensarse que se trata de manera exclusiva y única para los generales en retiro de la Policía Nacional y que para Fuerzas Militares comprende tanto a los generales como a los de menor rango, interpretación que no es acorde con la finalidad de la norma, como es precisamente determinar las circunstancias en las que un exintegrante tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Militares necesita medidas de protección.

Tal interpretación la realizó la Unidad Nacional de Protección para determinar su falta de competencia para la protección del accionante, dada la calidad de mayor retirado de la Policía Nacional, y por lo tanto, advirtiendo que el presunto riesgo del accionante se origina según lo expone y acredita el propio tutelante, de las quejas disciplinarias y penales realizadas contra oficiales, sub oficiales y personal civil de la Policía Nacional, y tiene relación directa con aspectos previstos como son la alteración en las actas de autorización para ascensos dentro de la Policía Nacional y las diferentes peticiones y denuncias realizadas frente a un actuar dentro de esa institución; para el Juzgado la competencia respecto del estudio de seguridad del mayor retirado William Adenis Lancheros Casas radica en la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, de tal manera que a su director le corresponde adelantar los trámites necesarios para iniciar el estudio de seguridad del mayor retirado William Adenis Lancheros Casas, con el fin determinar el riesgo y establecer si es susceptible o no de las medidas necesarias para su protección, por lo que se amparará los derechos tanto al debido proceso al no adelantarse el proceso administrativo para ello y al derecho a la vida en concordancia con la seguridad personal del accionante por las razones previamente expuestas.

1. **Peticiones del 3 de marzo de 2020**

El 3 de marzo de 2020, el accionante, radica 2 nuevas peticiones: **i)** Dirigida al Director de la Policía Nacional, a la cual se le asignó el radicado 018824 (Fls. 103 a 107 archivo PDF anexos de tutela) y **ii)** Dirigida al Subdirector de la Policía Nacional, a la cual se le asignó el radicado 018823 (Fls. 108 a 112 archivo PDF anexos de tutela).

El Juzgado advierte que las 2 solicitudes son idénticas, cambiándose únicamente el destinatario de estas, y con las que solicitó lo siguiente:

*“1.Siendo la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, la unidad generadora de estos hechos irregulares por falta de liderazgo, mando y control de sus comandantes, entre ellos el señor General ALVARO PICO MALAVER, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, que la respuesta sea firmada por usted, para así tener certeza que fue notificado de estos hechos irregulares al interior de la Policía Nacional, de acuerdo a lo solicitado en la petición inicial número uno, ya que se evidencia como el señor Director de Talento Humano está tratando de desviar la atención con unas respuestas evasivas a su responsabilidad.*

*2. Siendo la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, la unidad generadora de estos hechos irregulares por falta de liderazgo, mando y control de sus comandantes, entre ellos el señor General ALVARO PICO MALAVER, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, se revise detalladamente este caso, analizando una a una las diferentes denuncias de carácter penal, quejas disciplinarias y demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, lo anterior con el fin de evitar que este tipo de hechos se sigan presentando y aún más que los funcionarios involucrados continúen en los mismos cargos como es el caso del señor WILMER ALFONSO VARGAS CARVAJAL, quien firma las notificaciones como elaborador de los oficios en los que se le notifica a los oficiales si fueron o no seleccionados y recomendados para presentar el concurso previo al curso de ascenso al grado de Teniente Coronel, igualmente como son seleccionados y recomendados para presentar el concurso previo al curso de ascenso al grado de Teniente Coronel unos oficiales cuestionados por sus conductas, lo cual es un mensaje negativo para los demás miembros de la institución que han trabajado con honestidad.*

*3. Siendo la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, la unidad generadora de estos hechos irregulares por falta de liderazgo, mando y control de sus comandantes, entre ellos el señor General ALVARO PICO MALAVER, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, se revise detalladamente este caso analizando una a una las diferentes denuncias de carácter penal, quejas disciplinarias y demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, y se me informe porque el señor Mayor Fabio William Acevedo Flórez SI FUE SELECCIONADO Y RECOMENDADO para presentar concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel, aun cuando presenta tan graves cuestionamientos, pues si fueron capaces de falsificar tres actas firmadas por el señor Ministro de Defensa Nacional, han perdido el respeto a la norma penal y disciplinaria pues estamos ante el delito de falsedad ideológica en documento público en concurso heterogéneo y sucesivo con fraude procesal y porque no decirlo un concierto para delinquir para agravado por su condición de servidores públicos. En el evento que no se puedan responder algunas de mis peticiones respetuosas, se me informe los argumentos en derecho y el motivo por el cual no es posible dar respuesta, y si es por reserva de información que la misma sea enviada al Tribunal superior de Bogotá con toda la información anexada a la petición inicial, para que sea ese máximo órgano judicial quien dirima si efectivamente hay tal reserva, de acuerdo a lo solicitado en la petición inicial en el numeral decimo.*

*4. Siendo la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, la unidad generadora de estos hechos irregulares por falta de liderazgo, mando y control de sus comandantes, entre ellos el señor General ALVARO PICO MALAVER, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, que en el evento que ustedes al revisar los documentos que soportan mis denuncias y no lleguen a ser los competentes de acuerdo a la solicitud realizada en el numeral ocho de la petición inicial, se remita por competencia todo el expediente que anexe a la petición inicial y esta petición reiterada a la Procuraduría General de la Nación o entidades que ustedes consideren, a fin de que esa entidad asuma el poder preferente, pues si ustedes no tienen nada que ocultar es su deber como servidores públicos dar el trámite por competencia cuando la entidad no es la competente para dar respuesta clara y de fondo.*

*5. Siendo la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, la unidad generadora de estos hechos irregulares por falta de liderazgo, mando y control de sus comandantes, entre ellos el señor General ALVARO PICO MALAVER, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, se envié una copia de todo este derecho de petición inicial con sus anexos en él les informo esta novedad al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de que sea notificado de tan graves actuaciones IRREGULARES al interior de la Policía Nacional, pues si fueron capaces de falsificar tres actas firmadas por el señor Ministro de Defensa Nacional, los funcionarios han perdido el respeto a la norma penal y disciplinaria pues estamos ante el delito de falsedad ideológica en documento público en concurso heterogéneo y sucesivo con fraude procesal y porque no decirlo un concierto para delinquir para agravado por su condición de servidores públicos. Pero si seleccionan estos funcionarios tan cuestionados para presentar el concurso previo al grado de Teniente Coronel.*

*6. Siendo la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, la unidad generadora de estos hechos irregulares por falta de liderazgo, mando y control de sus comandantes, entre ellos el señor General ALVARO PICO MALAVER, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, solicito muy respetuosamente a mi General Subdirector General de la Policía Nacional, que en el evento que no se pueda dar respuesta a alguna de mis peticiones, se me informe los argumentos en derecho y el motivo por el cual no es posible dar respuesta”.*

El 5 de marzo de 2020, mediante oficio 2020-001664 el Subdirector de la Policía Nacional remite la petición al **Inspector General de la Policía Nacional** con el fin de “*disponer lo pertinente, con el fin de dar trámite disciplinario de conformidad con la ley 1015 de 2006 en concordancia con la Ley 734 de 2000*” (Fl. 117 anexos tutela).

A través del oficio S-2020-018504 del 25 de marzo de 2020, el Director de Talento Humano de la Policía Nacional le informa al accionante que mediante comunicación del oficia S-2020-010785/DITAH-ADEHU-1.10 del 19 de febrero de 2020, se dio respuesta concreta, precisa y de fondo a cada uno de los numerales enunciados nuevamente en la petición del 3 de marzo de 2020 ((Fls. 118 y 119 archivo PDF anexos de tutela).

Por su parte, el Inspector General de la Policía Nacional mediante oficio S-2020-006089 del 27 de marzo de 2020, da respuesta a la petición del accionante del 3 de marzo de 2020 (fls. 120 y 121 archivo PDF anexos de tutela), en la que señala:

“(…) *en relación a la competencia disciplinaria, la Inspección General, Grupo Procesos Disciplinarios Primera Instancia adelanta la investigación disciplinaria INSGE-2019-24, de la cual se le ha informado a usted en varias oportunidades con respecto a las solicitudes que ha elevado ante esa Oficina de Control. Ahora bien, en cuanto a los demás hechos referidos, se considera que la Dirección de Talento Humano se pronunció a lo solicitado en su petitum*”.

(…) *el hecho de no responderse una petición de manera favorable a los intereses del peticionario no significa que se vulnere este derecho fundamental, o que la repuesta no cumpla con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente*”.

En este punto, el Juzgado recuerda que el Inspector General de la Policía Nacional, no dio respuesta a las distintas solicitudes mediante peticiones del 3 de febrero de 2020, primero al radicado 2020-008069 que fuera trasladado por competencia por parte del Subdirector de la Policía Nacional, respecto de las peticiones 6, 7 y 8 realizadas por el señor William Adenis Lancheros Casas (Fl. 69 archivo PDF anexo de tutela), con lo cual se desconoce el derecho fundamental de petición del accionante.

Por otra parte, frente a la petición del 3 de marzo de 2020, que le fuera remitida por competencia, el Despacho advierte que lo informado mediante escrito S- 2020-006089 del 27 de marzo de 2020 (fls. 120 y 121 archivo PDF anexos de tutela), no corresponde a una respuesta de fondo ni se acompasa con el traslado de competencia realizado por el Subdirector de la Policía Nacional en tanto que la misma esta también direccionada para la posible investigación de conductas que se han presentado y se presentan a juicio del accionante en la Dirección de Talento Humano de la esa Institución, de tal manera que no resulta ajustado a derecho lo expresado por el Inspector General de la Policía Nacional, como quiera que no da respuesta a lo solicitado por el accionante ni a lo indicado por el Subdirector de la Policía Nacional.

Por lo que se amparará el derecho fundamental de petición de señor William Adenis Lancheros Casas y en consecuencia se ordenará al Inspector General de la Policía Nacional dar respuesta de fondo, clara y precisa a las peticiones del 03 de febrero de 2020 y del 3 de marzo de 2020.

Acorde con la calificación de las actuaciones realizadas por la Policía Nacional, el Juzgado encuentra que en algunos de los casos anteriormente descritos se vulneró el derecho de petición del accionante por lo que el mismo será amparado y se emitirán las órdenes para su protección.

Por otra parte, debido a la gravedad de las afirmaciones realizadas por el accionante y la falta de respuesta por parte de la Inspección General de la Policía Nacional, el Despacho compulsará copias ante la Procuraduría General de la Nacional y la Fiscalía General para que adelante las respetivas investigaciones. Para tal efecto remítase copia de la totalidad de la acción constitucional.

Por otra parte, el Juzgado negará la protección a los derechos fundamentalesa la dignidad humana, acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, como quiera que el accionante no acreditó que se presente su desconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

**RESUELVE:**

**PRIMERO. – Amparar** los derechos fundamentales de petición y a la vida en concordancia con la seguridad personal del señor William Adenis Lancheros Casas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. – Ordenar** al Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional que, dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, adelante los trámites necesarios para iniciar el estudio de seguridad del mayor retirado William Adenis Lancheros Casas, con el fin determinar el riesgo y establecer si hay lugar o no a las medidas de protección de su vida e integridad física.

**TERCERO. Ordenar** al inspector general de la Policía Nacional que, dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, responda de manera clara, precisa y completa: i) A la petición presentada por el señor William Adenis Lancheros Casas, el 3 de febrero de 2020, respecto de los numerales SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO, remitida por competencia por el subdirector de la Policía Nacional a través de Oficio S-2020 -000914, y ii) A la petición del 3 de marzo de 2020, remitida por competencia por el subdirector de la Policía Nacional, el 5 de marzo de 2020, mediante oficio 2020-001664 relativa a “*disponer lo pertinente, con el fin de dar trámite disciplinario de conformidad con la ley 1015 de 2006 en concordancia con la Ley 734 de 2000*”conforme se precisó en la parte motiva de este fallo.

**CUARTO. Ordenar** al general **Óscar Atehortúa Duque**en su condición de **director general de la Policía Nacional** y superior del Director de Protección y Servicios Especiales y del Inspector General de la Policía Nacional dentro de los **3 días siguientes** a la notificación de este fallo rinda un informe del cumplimiento de las órdenes impartidas.

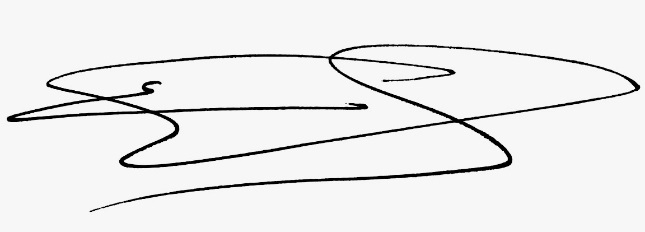
**QUINTO. Compulsar** copias ante la Procuraduría General de la Nacional y a la Fiscalía General para que adelante las respetivas investigaciones de conformidad con las competencias asignadas en la constitución y la ley. Para tal efecto, por secretaria remítase copia de la totalidad de la acción constitucional.

**SEXTO. Negar** la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, como quiera que el accionante no acreditó que se presente su desconocimiento.

**SÉPTIMO. Notificar** esta providencia a las partes por el medio más expedito, conforme lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**OCTAVO.** Si esta providencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, **remitir** el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ERICSON SUESCUN LEÓN**

**Juez**

oms

1. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, sentencia del 30 de marzo de 2017, Radicación número: 25000-23-36-000-2016-01509-01(AC). [↑](#footnote-ref-1)
2. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, sentencia del 9 de marzo 2017, Radicación número: 25000-23-36-000-2016-01195-01(AC) [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Bogotá D.C. 22 de febrero de 2007. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. Bogotá D.C., 8 de agosto de 2005. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Bogotá D.C., 25 de mayo de 2004. [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá D.C. 27 de febrero de 2001. [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacios Palacio. Bogotá D.C. 10 de febrero de 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sentencia C -214 de 1994. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sentencia C-214 de 1994, citada en sentencia T-010 de 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ídem. [↑](#footnote-ref-10)
11. T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibídem. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibíd. [↑](#footnote-ref-13)
14. Así por ejemplo, la Corte en la Sentencia T-719 de 2003, M.P Manuel José Cepeda Espinosa, señaló que el Constituyente expresamente proscribió la sujeción de las personas a ciertos riesgos que consideró inaceptables: el riesgo a ser sometidas a tortura, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12 C.P), el riesgo de ser sometidas a esclavitud, servidumbre o trata (art. 17 C.P), el riesgo de ser molestadas por sus convicciones o creencias (art. 18 C.P), el riesgo de ser molestadas directamente en su persona o en su familia (art. 28 C.P), el riesgo de ser objeto de persecución en forma tal que deban buscar asilo (art. 34 C.P), los múltiples riesgos a los que están expuestos los niños, entre ellos los peligros patentes de “toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” (art. 44, C.P.), los múltiples riesgos a los que se enfrentan las personas de la tercera edad, especialmente en casos de mala alimentación (art. 46), o los innegables peligros a los que están sometidos quienes desarrollan actividades periodísticas en nuestro país (art. 73). [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibídem. [↑](#footnote-ref-15)